



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, abril 14 de 2021

Radicado: 05001- 31- 05-**004-2014-00238-01**  
Demandantes LUIS BERNARDO GARCÍA ÁLVAREZ  
Demandados COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  
PROFESIONAL DE ANTIOQUIA -COOPEVIAN CTA  
Asunto: CONTRATO REALIDAD

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, la que se expone en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

A través de la acción judicial, pretende el actor se declare la existencia de una relación laboral con la CTA accionada, demandando de esta el pago de prestaciones sociales y beneficios laborales, así como la declaratoria de un

despido sin justa causa y de contera la indemnización de que trata el artículo 64 del C.S.T.

En sentencia que desató la primera instancia, el A quo, tras determinar que la vinculación que se genera dentro de las CTA es ajena a las relaciones laborales reguladas por el CST y una vez valorado el material probatorio, concluyó que, pese a demostrarse una labor como vigilante, la misma no se ejerció dentro de una relación laboral, ya que no se acreditó el componente de subordinación o jerarquizado dispuesta por los dueños de los medios de producción; además que no se probó que la cooperativa sirviera como intermediara para la tercerización de un servicio, por el contrario se vislumbró que la labor como vigilante fue dentro de los reglamentos de la CTA, donde los asociados son los gestores de la organización, que el actor se benefició de las dádivas cooperativas, que estuvo inmerso en una relación de coordinación, de la cual participó dada la calidad de delegado del consejo de administración de la CTA, siendo consiente del vínculo cooperativo que lo unía.

En consecuencia, sin que se demostrara la existencia de una relación laboral, determinó que no habría lugar a las condenas expuestas, las que estaban atadas a la declaración principal; explicando que la decisión de exclusión de la CTA se ciñó a las reglas del régimen asociativo.

Decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes, pero al ser adversa a las pretensiones de la parte activa, de la misma conoce esta corporación dentro del grado de consulta, en los términos del artículo 69 del CPTSS.

### **ALEGATOS**

Concedido el término establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la pasiva expresó que debe confirmarse la decisión absolutoria, por cuanto la vinculación asociativa cumplió con los presupuestos de validez y de la esencia,

destacando que, dentro de la CTA el señor García Álvarez ejerció el derecho al voto, hizo parte de la asamblea de asociados, que se benefició de los aportes sociales y recibió las compensaciones de acuerdo conforme a los estatutos sociales.

### **CONSIDERACIONES**

Previo al análisis, en el presente evento resulta relevante poner de presente que se encuentra por fuera de discusión que: **1)** El 10 de noviembre de 2001, Luis Bernardo García Álvarez suscribió un acuerdo cooperativo de trabajo asociado con la Cooperativa de vigilancia y seguridad profesional de Antioquia – Coopevian Ltda el 10 de noviembre de 2001, para la prestación del oficio como guarda de seguridad en el CR Torres de Santa María de la ciudad de Medellín, estableciendo que el acuerdo cooperativo podría darse por terminado unilateralmente por parte del asociado en cualquier momento y por parte de la CTA por violación del estatuto y régimen de trabajo asociado (fls. 108/109 y 238/239), **2)** Que con escrito del 8 de febrero de 2011 la CTA comunicó la decisión de exclusión del asociado, justificado en la transgresión del estatuto y régimen de trabajo asociado (fls. 108/109).

Así las cosas, dentro del grado de consulta habrá de analizar la corporación si el demandante fue trabajador subordinado de la CTA o si, por el contrario, tuvo la calidad de asociado de la misma, no sujeto a la legislación laboral. De determinarse si existió un vínculo laboral, se examinará la procedencia de las pretensiones de pagos de prestaciones sociales, beneficios laborales e indemnizaciones.

Pues bien, en el presente evento donde se pretende la declaración de existencia de una relación de naturaleza laboral, es relevante hacer hincapié en que, de conformidad a la Ley 79 de 1988, las Cooperativas de Trabajo Asociado, son empresa asociativa sin ánimo de lucro, cuyo objeto es el generar empleo para los asociados, desarrollando actividades económicas, profesionales o intelectuales orientadas a la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios y distribuyendo producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o

servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Es así que tanto los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, reintegrando sus excedentes a los mismos cooperados en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, así como destinándolos a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos sociales.

Se genera entonces una modalidad de trabajo, con una prestación personal y retribuida del servicio del servicio; el asociado recibe la denominación de trabajador, pero el desarrollo de su función es autogestionada, orientada por la misión del ente solidario, bajo los estatutos y no se encuentra mediada por el elemento de subordinación, ya que la gestión se ejerce de forma conjunta y organizada por todos los asociados. Es esta la línea que marca la diferencia con la relación laboral, la que comporta un vínculo jerarquizado, de sometimiento a las reglas y directrices de un empleador.

En este sentido, debe tenerse presente que si bien se admite que estos entes contraten la ejecución de una labor a favor de terceras personas, no puede utilizarse este tipo de vinculación de forma fraudulenta para disfrazar la existencia de una verdadera relación subordinada, en desmedro de los derechos de los trabajadores asociados, evadiendo los pagos de derechos laborales legítimamente causados dentro de una verdadera relación subordinada al servicio de una persona natural o jurídica (CSJ SL 6441 de 2015, que reitera lo expuesto en la sentencia de radicado 25713 de 2006)

Uso indebido de las CTA que no cuenta con respaldo jurídico y es reprochable de cara al objetivo que persiguió la ley al permitir el funcionamiento de esos entes cooperativos, así lo indica el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006:

*Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.*

*Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.*

En adición, conforme al artículo 4° del decreto 2025 de 2011, incurrir en conductas de intermediación laboral genera sanciones económicas, al igual que constituye causal de disolución y liquidación.

*“Artículo 4°. Cuando se establezca que una Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado ha incurrido en intermediación laboral, o en una o más de las conductas descritas en el artículo anterior, se impondrán sanciones consistentes en multas hasta de cinco mil (5.000) smlmv, a través de las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. **Entrará a regir una vez sea sancionada y promulgada la Ley del Plan de Desarrollo Económico 2010-2014 "Prosperidad para Todos".***

*Además de las sanciones anteriores, las cooperativas o precooperativas de trabajo asociado que incurran en estas prácticas quedarán incursas en causal de disolución y liquidación. La Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás Superintendencias, para el caso de las cooperativas especializadas, cancelarán la personería jurídica.*

Con las premisas expuestas se descende al caso concreto hallando acreditada la prestación personal de un servicio remunerado como vigilante del señor García Álvarez entre el 7 de noviembre de 2001 al 8 de febrero de 2011, extremos temporales que se acreditan con la certificación de folio 110 y lo reconoce el representante legal de la CTA accionada, al inicio de su declaración.

Habrà de determinarse si se hallaba presente el elemento de la subordinación propio de la relación laboral.

Al respecto, además del pacto formal o acuerdo cooperativo (fls. 233/235) se acreditó que el 2 de marzo de 2006 el actor aprobó el curso de formación en economía solidaria, impartido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con una duración de 24 horas (fl. 236)

Se demostró que la CTA Coopevian cuenta con unos estatutos, que determinan su objeto social, actividad, régimen de admisión y exclusión, catálogo de deberes y derechos, de beneficios sociales, forma de administración entre otros aspectos, documento del cual era conocedor el actor, en tanto lo adosó con el escrito de demanda (fls. 12/68) pese a referirse a él como un “librito azul que nunca llegó a estudiar” (minuto 43 de la diligencia) lo que denota que sí le fue puesto en conocimiento, pero no se interesó en conocerlo.

En adición resultan relevantes los dichos del demandante, quien afirmó que nunca fue coaccionado, ni obligado para ingresar a la CTA, que asistió al curso de cooperativismo, que tuvo interés en participar en los organismos directivos de Coopevian, sin obtenerlo, aunque aclara que le fue notificado su elección como consejero suplente, pero que nunca representó a los asociados en ninguna asamblea.

Reconoció que aquellas personas que ejercían el control, supervisión y programación de su labor eran trabajadores asociados a Coopevian, que durante su vinculación se le realizaron descuentos denominados aportes, los que le fueron reintegrados al momento de su exclusión, además aceptó que durante una incapacidad laboral por espacio de 4 meses, recibió un auxilio de parte de la CTA.

En cuanto a la participación en la gestión de la CTA, a folios 255 y 258 reposan las solicitudes de inscripción del demandante ante el Consejo de Administración del 28 de diciembre de 2010 y 26 de enero de 2010, respectivamente; al igual que la misiva del 29 de octubre de 2009 donde se niega la inscripción para la elección al cargo de promotor de servicios dada la existencia de una sanción disciplinaria (fl. 257)

También resulta ilustrativo el documento del 3 de agosto de 2009 emanado del actor y dirigido a los miembros del Consejo administrativo de Coopevian donde expresa su intención de ejercer algún cargo administrativo, indicando que con sus conocimientos, experiencia y aptitud puede ayudar al desarrollo de los fines de la cooperativa, satisfaciendo los intereses de los usuarios (fls. 259/260)

A su vez, el representante legal de la entidad, explicó que dentro de la organización de la CTA existen unos asociados que se desempeñan como programadores y coordinadores. Relativo a aquellos refirió que su misión es indicar el lugar donde se debe prestar el servicio, determinar cómo se cubren las vacantes temporales, como permisos, descansos, licencias, incapacidades, enviar refuerzos cuando hay una solicitud de mejoramiento por parte del cliente. Por su parte, los supervisores lideran el equipo de asociados y sigue los protocolos de cuidado, al igual que verifican que se esté cumpliendo los parámetros.

En cuanto a la finalidad de la organización, explicó que la entidad no tiene ánimo de lucro, por lo que los excedentes de las actividades desarrolladas son distribuidos

en forma de compensación, una porción denominada básica, que constituye el salario base de cotización para los pagos al sistema de seguridad social, y otro componente que refleja los auxilios sociales a saber: **1.** Auxilio de comunicaciones, para que tenga un medio de contacto con su familia y otros asociados, - telefonía móvil; **2.** Auxilio de alimentación para que asociado que no puede desplazarse a tomar los alimentos a su hogar pueda pedir un domicilio o de alguna forma proveerse de alimentos, **3.** Auxilio de movilidad, en atención a los desplazamientos o medios de transporte que debe asumir para llegar al sitio de servicio y **4.** Auxilio de nocturnidad, para compensar el tiempo que el asociado pasa alejado de su familia en las noches.

Relató que Luis Bernardo se benefició de las garantías sociales, recibiendo auxilio en un periodo largo de incapacidad, auxilio por descanso, obsequio en diciembre, kit escolar, entre otros.

También fue escuchada la testigo Rosalba Puerta Quiroz, quien pese a señalar que conoció del servicio prestado por Luis Bernardo en el edificio Torres de Santa María, por espacio de 11 años, no revela conocimiento alguno sobre la forma de vinculación de aquel a la cooperativa, tampoco de la gestión de la misma, su participación en eventos de capacitación en cooperativismo, si se le permitió ejercer el voto en asambleas o ser elegido y señaló que a su juicio las directrices eran dadas por el personal de administración del conjunto residencial.

Con estos elementos de prueba esta corporación concluye que en la vinculación y desarrollo de la actividad productiva del señor Luis Bernardo García no se evidenció un poder de subordinación propio de la relación laboral amparada por el CST, por el contrario, se acreditó que lo fue bajo los esquemas propios de las Cooperativas de trabajo asociado, con ejercicio del poder de autogestión y liderazgo.



Se demostró que al actor se le instruyó en los temas esenciales del cooperativo, que pese a que él calificó las instrucciones dadas como básicas y se refiere a los estatutos como un “librito azul” sí actuaba bajo estándares de auto gestión, fue así que en varias ocasiones se postuló para pertenecer al cuerpo directivo de la organización social, que presentó escritos que reflejaba su intención de favorecer el crecimiento social, siendo elegido como dirigente suplente y en tal calidad se anunció ante el consejo de administración, esto en escrito del 27 de enero de 2011 (fl. 243)

Se destaca además que el señor García Álvarez disfrutó de los auxilios solidarios, en particular del auxilio por incapacidad, siendo admitido por este que estuvo convaleciente por casi 4 meses y que en razón de ello la CTA le brindó apoyo, al igual que aceptó que a su desvinculación le fueron retornados los aportes descontados.

Quedó acreditado que dentro de la organización cooperativa existían cargos de dirección, lo que no generó una negación del esquema de autogestión, sino que, refleja la necesidad de establecer orden y control a efectos que exista un rumbo común definido, unos lineamientos de calidad en la prestación del servicio que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con terceros, pero además que redunden en el crecimiento del ente social. Destaca la corporación que la autogestión no puede confundirse con un modelo donde cada asociado decida qué hacer, donde y a qué hora, en tanto ello genera desorden, caos y por ende, el fracaso del proyecto asociativo.

Ahora bien, no es del caso entrar a analizar la existencia de una tercerización o abuso de la figura de las CTA, por cuanto tal aspecto no fue pedido en la demanda, ni analizado en el debate probatorio, además que no podría individualizarse a un beneficiario de la labor, en tanto solo se alude a una copropiedad de nombre Torres

de Santa María, pero la misma no fue vinculada al trámite procesal, lo que impide declarar una responsabilidad laboral, de la cual, eventualmente y solo en los términos del artículo 34 del CST, sería responsable solidaria la CTA demandada.

Pero si en gracia de discusión se estudiara tal asunto, tampoco se demuestra que tras el funcionamiento y contratación del señor García Álvarez a través de la CTA se generara una tercerización de un servicio para desconocer los derechos laborales, pues no existe prueba alguna que devese que con la copropiedad existiera una subordinación, ya que, aunque la testigo Rosalba Puerta Quiroz expresó que las labores redundaban en beneficio de los habitantes del edificio torres de Santa María y que las órdenes eran dadas por el administrador del edificio, considera la Sala que tal aseveración no resulta suficiente para establecer la existencia de un vínculo laboral en los términos del artículo 24 del CST, pues, además que no se describen cuáles eran las órdenes recibidas, no puede considerarse que al tratarse de una función de vigilancia que se presta dentro de una copropiedad, el trabajador pueda hacerla de forma aislada a las directrices del conjunto residencial, a las necesidades de sus habitantes, a las posibles sugerencias, reproches o incluso agradecimientos que se generen en la función desempeñada.

Así las cosas, será confirmada la decisión del A quo que declaró impróspera la pretensión de declaración de la existencia de una relación laboral regida bajo los estándares del CST y por derivación, el fracaso de las pretensiones accesorias o consecuenciales, relativas al reconocimiento de beneficios, prestaciones e indemnizaciones propios de la relación de tal naturaleza.

Costas en primera instancia como dispuso el A quo. sin costas dentro del grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, confirma de forma total la sentencia revisada en consulta.

Costas en primera instancia como dispuso el A quo. sin costas dentro del grado de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

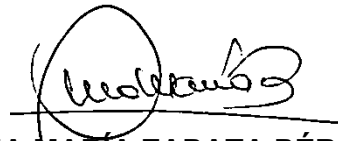
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 62 publicados por medios digitales el 15 de ABRIL de 2021